EL OBSERVADOR REGIONAL
http://elobservador.univalle.edu.co ISSN: 2011 - 3420

Cidse

Cali, junio de 2013
No. 26

EDITOR:
Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

Esta es una publicación del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CIDSE de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle
www.univalle.edu.co http://socioeconomia.univalle.edu.co

Participan en este número:
Boris Salazar y Cristian Frasser
Miembros del Grupo Conflicto, aprendizaje y teoría de juegos
http://conflictoaprendizaje.univalle.edu.co

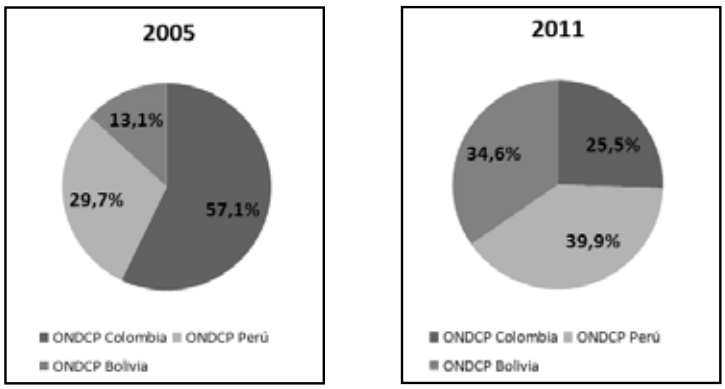
MENOS COCAÍNA, MÁS VIOLENCIA

Boris Salazar y Cristian Frasser[1]

Introducción

La caída de la producción colombiana de cocaína debería ser una buena noticia. Después de varios años de librar –con dedicación sin igual en el mundo— la guerra contra las drogas ideada en Washington, Colombia parecería estar a punto de respirar tranquila. El informe de la Oficina de la política nacional para el control de las drogas de los Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés) afirma que la producción colombiana de cocaína habría caído, desde un pico de 700 toneladas métricas en 2001, a 195 toneladas métricas en 2011. Mientras en el 2005 Colombia producía 57.1% de la cocaína mundial, en 2011 esa cifra sólo alcanzó el 25.5% (figura1). En los últimos diez años Colombia habría dejado de ser el primer productor y exportador de cocaína, para caer a un tercer lugar, dejando los dos primeros lugares a Perú y Bolivia.

Figura 1.
Porcentaje de la producción mundial de cocaína por países.



Fuente: ONDCP

Aunque el boletín de prensa de la ONDCP no es transparente con respecto a los métodos utilizados, la tendencia registrada coincide con los datos del último informe de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas

[1]Profesores Departamento de Economía, Universidad del Valle

Universidad del Valle

contra la droga y el delito): entre 2006 y 2011 inclusive, tanto el área cultivada, como la producción potencial de hoja de coca fresca y la fabricación potencial de cocaína, no dejaron de caer en Colombia. (UNDOC 2012, 50-52) Y al igual que lo establece el boletín de la agencia de los Estados Unidos, las Naciones Unidas observaron una tendencia opuesta en Perú y Bolivia –países que no han participado con igual entusiasmo en la guerra contra las drogas.

Mientras tanto las incautaciones de cocaína presentaron una tendencia estable después de haber llegado a un pico en 2005, en el punto más alto de las campañas de erradicación y fumigación adelantadas en Colombia. Este dato debe ser entendido en el contexto de la guerra global contra las drogas: en ese mismo periodo, las dos terceras partes de las incautaciones de cocaína mundiales ocurrieron en Suramérica y Centroamérica. La implicación es obvia: los efectos derivados de las pérdidas de capital y de exportaciones han afectado, en mayor proporción, a narcotraficantes que operan desde Colombia, conectados a operadores de otros países de Suramérica y Centroamérica.

Si narcotráfico y violencia habían evolucionado en forma sincronizada en el pasado era razonable suponer que una caída en la producción, fabricación y exportación de cocaína colombiana debería también disminuir la violencia asociada a este negocio. Pero no ha ocurrido así. Por el contrario, la caída de las exportaciones nacionales de cocaína y la destorcida del negocio han conducido a una violencia que se está extendiendo sobre los sectores sociales más vulnerables. Es lo que queremos argumentar en este artículo.

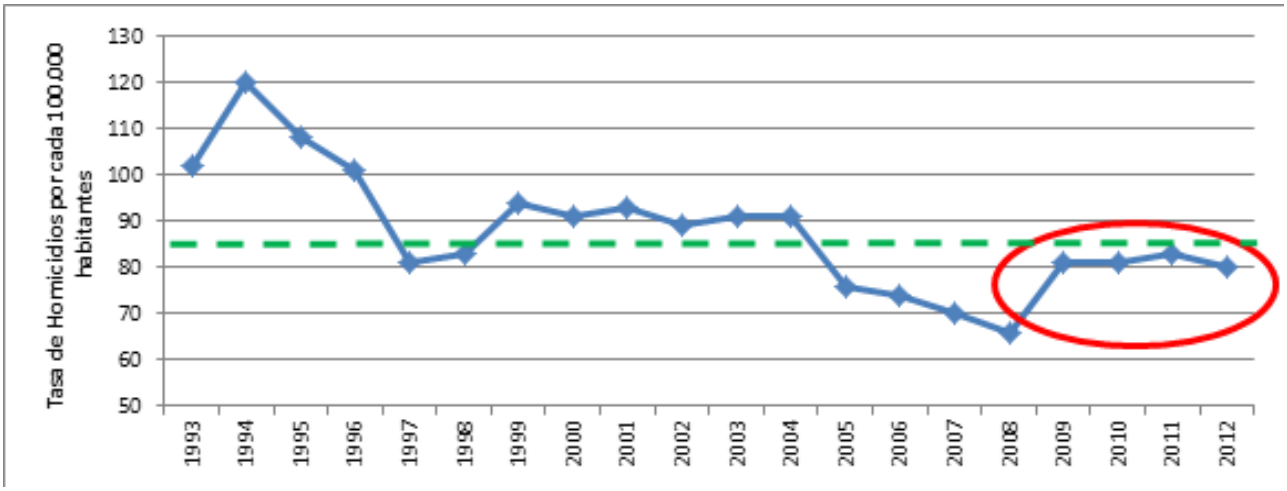
Más violencia

¿Qué tan buenas son estas noticias para Colombia? Contrario a lo que afirman las autoridades de los Estados Unidos, el éxito de la guerra contra las drogas no ha resultado ser una buena noticia para los colombianos. Más allá de la retórica con respecto a la derrota del crimen organizado y la consolidación del Estado y de la justicia, la realidad visible es una aceleración de la violencia en aquellas ciudades y regiones colombianas en las que el negocio del narcotráfico generaba la mayor parte de los ingresos del crimen organizado.

Es el caso de Cali[2]. Según la información disponible, después de un descenso en el periodo 2004-2008 la tasa de homicidios de la capital vallecaucana ha vuelto a crecer, acercándose al nivel de su promedio histórico (figura 2). Por su parte, el número de homicidios registrados durante el 2012 fue de 1832, apenas uno menos que los perpetrados en 1993. Y para el primer trimestre del 2013 el número de homicidios fue superior al primero de 2012. En definitiva, el descenso en los homicidios del periodo 2004-2008 y el júbilo que despertó en las autoridades locales, son cosa del pasado. El negocio del narcotráfico cambió y con ello aparecieron nuevas articulaciones y modulaciones de la violencia.

[2] En Medellín está ocurriendo un fenómeno similar, con las diferencias inevitables de las trayectorias del crimen organizado en las dos ciudades: a partir de 2008 es fácil ver un incremento de los homicidios y las extorsiones y una extensión de la violencia organizada a sectores sociales más amplios. [Martin 2012, Medina et al. 2011] Esto a pesar de los notables esfuerzos de política social de las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, y del notorio descenso en la tasa de homicidios ocurrido entre 2002 y 2007.

Figura 2.
Evolución de la tasa de homicidios en Cali,
1993-2012.



Fuente: Alcaldía de Cali (periodo 1993-2010) y Medicina Legal (2011-2012). Se usaron las proyecciones demográficas de 2011 y 2012 que estimó el DANE.

En estricta justicia, el boletín de prensa de los Estados Unidos ni siquiera habla de los beneficios para los colombianos. Su descripción optimista de las consecuencias de lo ocurrido se concentra en los beneficios que los ciudadanos de Estados Unidos derivan de los logros alcanzados: menor consumo de cocaína, menor pureza de la droga vendida, un número menor de muertes por sobredosis y una caída en las incautaciones de droga en los Estados Unidos.

Con respecto a Colombia, los efectos benéficos son más abstractos y están concentrados en el fortalecimiento del Estado y en la confianza de los inversionistas extranjeros, no en el bienestar de sus ciudadanos. Colombia y Estados Unidos habrían logrado reducir las exportaciones de cocaína debido al logro de unas

> …instituciones democráticas fortalecidas, mayor presencia del gobierno de Colombia a lo largo y ancho de su territorio, erradicación persistente y focalizada, esfuerzos de represión legal concentrados en las organizaciones de narcotraficantes, mejorías del sistema judicial, desarrollo alternativo, e inversión extranjera creciente como resultado de un ambiente más seguro. (ONDCP 2012)

El silencio con respecto a los efectos reales sobre la vida, el bienestar y los ingresos de los ciudadanos colombianos es un reflejo del lado oscuro de la guerra contra las drogas. Si bien es cierto que la guerra ha sido exitosa desde el punto de vista de la caída de la producción y exportación de cocaína, de la desarticulación de las grandes organizaciones de narcotraficantes y de su sometimiento a la protección de la justicia de los Estados Unidos, no lo ha sido desde el punto de vista de la supervivencia y de la calidad de vida de los colombianos no participantes en el negocio del narcotráfico.

El modelo de guerra elegido por el gobierno de Estados Unidos busca la derrota de las grandes organizaciones de narcotraficantes, su desarticulación y fragmentación, pero deja al Estado colombiano el tratamiento de los agentes violentos que han crecido a la sombra del narcotráfico y de la misma guerra contra las drogas. Mientras que los primeros terminaron entregándose en forma voluntaria a los Estados Unidos, o fueron apresados y extraditados a ese país para ser sometidos a su justicia, los sicarios, pistoleros, y especialistas en violencia en general, que estaban a su servicio, quedan en Colombia enfrentando a un sistema judicial y policivo de una fragilidad que lo hace cercano a la inexistencia.

Por eso, el resurgimiento de la violencia observado en ciertas ciudades colombianas a partir de 2009 (Medina et al. 2011), a diferencia de lo que piensan otros analistas[3], no es resultado de los mismos ajustes de cuentas de siempre entre narcotraficantes, ni siquiera del simple reacomodamiento inducido por las entregas y capturas de grandes capos ocurridas en los últimos años. Hay algo más profundo en esa aceleración sincronizada de la violencia en ciudades y regiones en las que el narcotráfico era fundamental en su vida económica y social.

La reducción de la demanda por servicios de protección y de regulación en esas ciudades ha disminuido los ingresos de los especialistas en violencia de todos los tipos (sicarios, oficinas, bandas, pandillas), y los ha llevado a extender la oferta violenta de sus "servicios" a negocios legales e ilegales de menor escala. El crecimiento de la extorsión a comerciantes, productores, transportadores y hasta trabajadores informales y escolares ha incrementado la violencia a través de dos vías: el asesinato de los que no pagan la extorsión exigida y el pago de las víctimas a otros agentes violentos para que eliminen a los extorsionistas. Esta violencia adicional se suma a la "usual" producida por la regulación violenta del negocio del narcotráfico. Es más: los dos tipos de violencia tienden a reforzarse mutuamente, generando un sistema que tiende a reproducir la violencia a través de distintos circuitos.

La violencia extendida: el caso de Cali

Lo que parecía ser una violencia exclusiva entre bandidos se ha convertido en una violencia que involucra a una fracción creciente de la población de las ciudades y regiones afectadas. Es un efecto perceptible a todas las escalas: en ciudades como Cali, los niños de las escuelas, que viven en barrios cuyo control territorial está en disputa por parte de pandillas y otras organizaciones armadas, deben pagar un peaje o no pasar por los territorios prohibidos camino de la escuela. Una proporción creciente ha optado por no regresar a la escuela. En Buenaventura, la disputa territorial ha generado una nueva ola de desplazamiento interno que está dejando a una parte de sus habitantes sin ningún lugar para vivir en su propia ciudad, mientras cientos de viviendas están desocupadas.

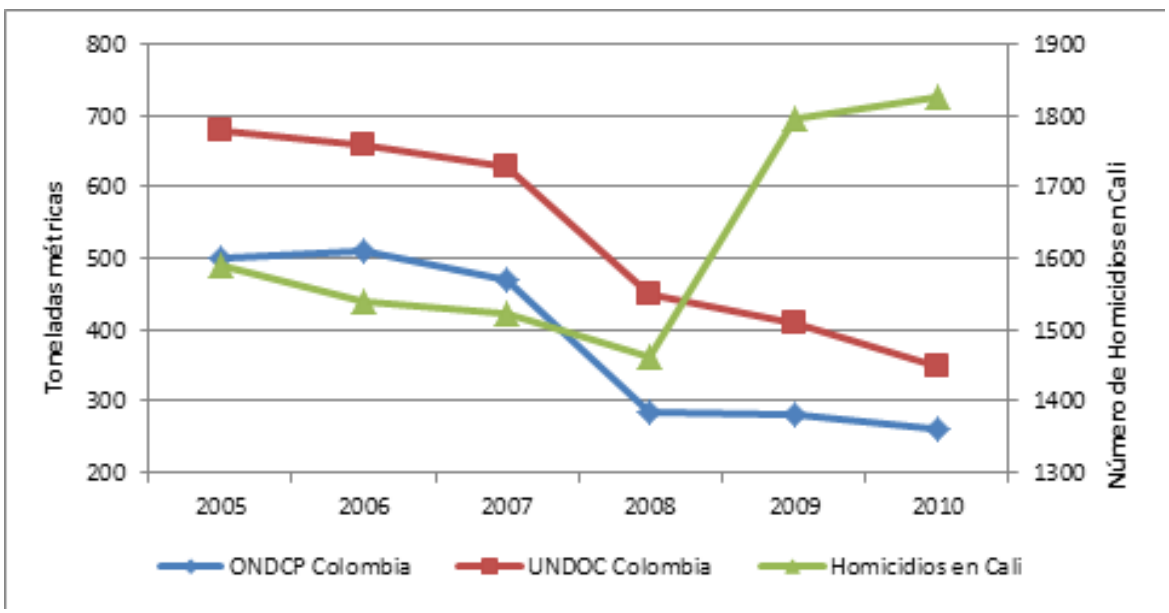
He aquí nuestra hipótesis. El éxito de la guerra contra las drogas, que llevó a la caída de la producción y de la exportación de cocaína y a la entrega de más de 300 capos del narcotráfico a los Estados Unidos, redujo los ingresos potenciales y reales del crimen organizado –que vivía de extraer tributos y realizar tareas de regulación violenta para los narcotraficantes— y lo ha llevado a extender sus prácticas extorsivas y de tributación ilegal a la economía legal, afectando todo tipo de pequeños productores y comerciantes, y generando una cascada de violencia que ha activado, de paso, a pandillas juveniles y delincuentes menores, y elevado los índices de inseguridad en ciudades como Cali, Medellín, Buenaventura, Tuluá, Pereira y Cúcuta.

[3]Por ejemplo, véase Durán (2013).

La evidencia no parece rechazar la anterior hipótesis, aunque a futuro es necesario realizar análisis cuantitativos más exhaustivos. En la figura 3, se muestra la evolución del número de homicidios en Cali y la producción de cocaína a nivel nacional según las dos fuentes de información disponibles. Allí se aprecia que entre 2005 y 2008 la constante reducción en la producción de cocaína se vio acompañada de una caída en el número de homicidios. No obstante, a partir del 2009 los homicidios se incrementaron en forma notable, mientras la disminución en la producción de cocaína continuaba su destorcida.

Sin embargo, el impacto de la menor actividad del narcotráfico sobre la aceleración de la violencia no fue inmediato. Hay una explicación razonable: saber que las condiciones adversas no eran transitorias sino permanentes requería de un periodo de adaptación y descubrimiento de la naturaleza de los cambios ocurridos. Más aún: en el corto plazo los operadores violentos todavía disponían de un flujo de recursos provenientes de negocios hechos en el pasado, que les permitía mantener el mismo nivel de la demanda de protección y regulación violenta del negocio.

Figura 3.
Producción de cocaína en Colombia y tasa de homicidios en Cali, 2005-2010.



Fuente: ONDCP, UNDOC, Alcaldía de Cali.

Para decirlo en una frase, ahora tenemos más pistoleros peleando por una cantidad cada vez menor de dinero ilegal. La salida inmediata ha sido la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos en la economía legal y en las pequeñas economías ilegales, mucho menos líquidas y con menor capacidad de pago. Las que lo están haciendo no son las mismas organizaciones de narcotraficantes y sicarios del pasado, sino los fragmentos que quedan de ellas después de haber sido sometidas a las fuerzas centrífugas internas, propias de todo negocio ilegal, y a la presión de las autoridades colombianas y de los Estados Unidos.

Pero no se trata de muchos pistoleros sueltos, buscando por su cuenta ingresos después de la destorcida del narcotráfico. En realidad, son es-

tructuras, "oficinas", bandas, pedazos de bandas, pandillas y parches en transición hacia bandas organizadas. Un archipiélago de bandas y fragmentos de bandas producto del desorden creciente generado por la presión de las autoridades de los Estados Unidos y Colombia y el predominio inevitable de la violencia en el mundo del narcotráfico; y de la combinación de los dos como resultado de la política de negociación y entrega de narcotraficantes puesta en marcha por los Estados Unidos a partir de 1998.[4]

Lo que ha seguido es un típico efecto de cascada que se ha ido expandiendo a través de las redes sociales en las que están incrustadas las redes criminales, que aspiran a extraer tributos de todos los ciudadanos a su alcance. Un alcance que no se agota en su pura proximidad espacial y social, sino en la falta de protección legal y estatal de las víctimas potenciales. Por eso, las víctimas de la nueva oleada de extorsión no son los más ricos, sino los ciudadanos cercanos, sin protección alguna, que tienen alguna cantidad de efectivo disponible. Ser alcanzable es equivalente a estar cerca y no tener ningún tipo de protección.[5]

La reacción normal de las víctimas en un medio de violencia recurrente es pagar por la eliminación de sus extorsionistas. Aunque no disponemos de datos específicos es razonable suponer, que una parte de las ejecuciones ocurridas en las ciudades mencionadas refleja pagos de ciudadanos extorsionados, que no ven otra opción para sobrevivir y mantener sus negocios. El pago a sicarios por parte de las víctimas incentiva la actividad homicida, genera mayor violencia y sosteniendo el avance de la cascada.

El punto esencial es que se trata de una violencia que involucra a una parte creciente de la población en los sectores sociales que están al alcance del crimen organizado. Lo que antes podía ser interpretado como procesos naturales de control violento circunscritos al mundo criminal ha entrado ahora a hacer parte de las formas cotidianas de interacción social, en ciertas comunas y barrios de las ciudades afectadas. Los costos derivados de la actividad homicida crecen con el avance de la cascada violenta. Además de los costos resultantes de la pérdida de vidas humanas y de capital humano y físico asociado con ellas, están los costos relacionados con el incremento de la desigualdad y la pérdida de tejido social, capital económico y humano y de actividad económica en general derivados de la extorsión y la inseguridad.

Es obvio que los efectos económicos sobre los sectores de menores ingresos son mucho mayores: la destrucción de negocios, capitales y expectativas en sectores sociales desfavorecidos tienen un impacto mucho mayor allí que en sectores sociales con mayores ingresos. En el mismo sentido, el efecto imitación para jóvenes y niños que ven en el sicariato una alternativa preferible a la educación y al trabajo tiene un costo altísimo en términos de igualdad y de posibilidades perdidas.

En el centro de todo está la incapacidad estructural del Estado para proteger a los ciudadanos. Mientras que los narcotraficantes encontraron un protector ideal para su supervivencia en la justicia de los Estados Unidos, los colombianos que no han participado en el negocio, o que viven de actividades legales, no tienen todavía un Estado que los proteja.

[4]De hecho, una fracción considerable de la violencia ocurrida en Cali, entre 2000-2004, puede ser atribuida a la aniquilación sistemática de los familiares y asociados de los capos que intercambiaron penas menores por delaciones de sus antiguos colegas en los Estados Unidos. La volatilidad derivada de los arreglos con la justicia estadounidense volvió a crecer en los dos últimos años debido a la entrega y negociación de los hermanos Comba y de la captura de varios jefes de distintas organizaciones de narcotraficantes.

[5]Según los datos del Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, en el 2012 las víctimas de la violencia homicida fueron principalmente desempleados, comerciantes, estudiantes, obreros, indigentes, motoristas, vendedores ambulantes, vigilantes, recicladores, amas de casa, pensionados, carretilleros, vendedores y taxistas.

Referencias

Durán, A. 2013. Cali, o la invisibilidad de la violencia. Portal: Razón Pública. http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3671-cali-o-la-invisibilidad-de-la-violencia.html

Martin, G. 2012. *Medellín, tragedia y resurrección: mafia, ciudad y estado 1975-2012*. Bogotá: Planeta.

Medina, C., C. Posso y J. A. Tamayo. 2011. Costos de la Violencia Urbana y Políticas Públicas: Algunas Lecciones de Medellín, *Borradores de Economía*, No 674. Banco de la República.

ONDCP. 2012. Survey Shows Significant Drop in Cocaine Production in Colombia. ONDCP press release, July 30.

UNODC. 2012. Informe mundial sobre drogas. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

El *Observador Regional* es un medio de expresión de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE). Se concentrará en el análisis de la coyuntura económica, social y política de la región y en el estudio de problemas como el conflicto regional, el crecimiento económico, la acción colectiva, las dinámicas del empleo y los mercados regionales, los problemas ambientales, las transformaciones demográficas, las elecciones locales y departamentales, entre otros muchos aspectos de la dinámica económica y social regional. Dicho análisis se apoyará en los resultados de los estudios que llevan a cabo los siete grupos de investigación adscritos al CIDSE: Conflicto, Aprendizaje y Teoría de Juegos; Estudios Étnico-Raciales y del Trabajo en sus Diferentes Componentes Sociales; Sociedad, Historia y Cultura; Desarrollo Económico, Crecimiento y Mercado Laboral; Economía Regional y Ambiental; Acción Colectiva y Cambio Social y Macroeconomía Aplicada y Economía Financiera. También se presentará la reflexión de los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas no adscritos a los grupos de investigación e invitaremos a docentes e investigadores de otras facultades y universidades para que se expresen sobre los problemas mencionados.